

Mundos rurales en la Argentina contemporánea: entre la democracia y el extractivismo (1983-2023).

Wahren, Juan - *juanwahren@conicet.gov.ar*

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Acosta, María de la Paz - *mariadelapaz.acosta@gmail.com*

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

García Guerreiro, Luciana - *lucianagarciaguerreiro@yahoo.com.ar*

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Hadad, María Gisela - *giselahadad@hotmail.com*

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Palmisano, Tomás - *tomas.palmisano@conicet.gov.ar*

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Perelmuter, Tamara - *tamiperelmuter@gmail.com*

Centro de Investigación para la Agricultura Familiar - INTA, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Petz, María Inés - *inespetz@yahoo.com.ar*

Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Recibido: 17/09/2023

Aprobado: 13/12/2023

Resumen: El presente artículo analiza los procesos económicos, políticos y sociales que atravesaron y definieron los mundos rurales de la Argentina en los últimos 40 años (1983-2023), coincidentes con el ciclo más largo de democracia constitucional de nuestra historia como país. En dicho marco político institucional se sucedieron gobiernos diversos en términos de matriz ideológica, apertura y participación social, redistribución/concentración del ingreso, protección o apertura del mercado y la producción local, etc. Sin embargo, a lo largo de toda la etapa es posible encontrar una línea de continuidad en torno a un modelo de desarrollo, caracterizado como extractivista, según el cual la matriz económica nacional se orienta, prioritariamente, hacia una producción primario-exportadora.

En este trabajo nos interesa analizar articuladamente, por un lado, las implicancias de la implantación territorial de la lógica extractivista expresada en el agronegocio, la megaminería y los hidrocarburos y, por el otro, los procesos de organización política, acción colectiva y movilización social que se oponen a la misma. Valiéndonos del acervo de entrevistas, trabajos de campo y análisis de datos secundarios que concentra nuestro equipo de investigación en las últimas décadas, proponemos una lectura analítica que abone comprender más profundamente esta etapa compleja de nuestra historia contemporánea.

Palabras Clave: Extractivismo; democracia; resistencias territoriales; movimientos sociales rurales.

Abstract: This article analyzes the economic, political, and social processes that went through and defined the rural worlds of Argentina in the last 40 years (1983-2023), coinciding with the longest cycle of constitutional democracy in our history as a country. In this political-institutional framework, various governments succeeded one another in terms of ideological matrix, openness and social participation,

redistribution/concentration of income, protection or deregulation of the market and local production, etc. However, throughout this stage it is possible to find a line of continuity around a development model, characterized as extractivist, according to which the national economic matrix is oriented, as a priority, towards primary-export production.

In this work we are interested in analyze the implications of the territorial implementation of the extractivist logic expressed in agribusiness, mega-mining and hydrocarbons, on the one hand, and on the other, the processes of political organization, collective action and social mobilization that oppose it. Using interviews, field work records and secondary data that our research team has compile in recent decades, we propose an analysis which contributes to a deeper understanding of this complex stage of our contemporary history.

Key Words: Extractivism; democracy; territorial resistance; rural social movements.

Introducción

El objetivo general del presente artículo es analizar articuladamente, por un lado, las implicancias de la implantación territorial de la lógica extractivista –expresada en el agronegocio, la megaminería y los hidrocarburos– y, por el otro, dar cuenta de los procesos de organización política, acción colectiva y movilización social que se oponen a la misma. Para ello, seleccionamos ciertas dimensiones que permiten dar cuenta de las conexiones entre las modificaciones de los andamiajes institucionales, los cambios productivos de las actividades primario-exportadoras, las transformaciones de la estructura social agraria; así como la conflictividad, los procesos organizativos y las propuestas de alternativas que emergen desde los movimientos sociales rurales. Tomamos como principal clave de lectura la que brinda el paradigma del extractivismo, en tanto enfoque pertinente para pensar los cambios estructurales del período y sus consecuencias en los territorios y poblaciones. El análisis fue ordenado de manera cronológica en dos etapas diferenciadas ligadas a las dinámicas de las luchas sociales rurales. La primera, que se inicia tras el retorno a la democracia representativa en 1983 y finaliza en 2001, está signada por un proceso de reconstrucción identitaria de los actores sociales, de resistencias a los avances del modelo neoliberal y de defensa de la tierra y los territorios rurales; la segunda, que se extiende entre 2002 y la actualidad, es determinada por el llamado “giro eco-territorial” de las luchas (Svampa 2012) frente al

avance exponencial del modelo de desarrollo extractivista y una expansión de las luchas campesinas, indígenas y de otros actores subalternos de los mundos rurales que despliegan alternativas sociales en diferentes dimensiones (productiva, educativa, sanitaria, autogestión, entre otras).

Cabe señalar que en ambos períodos hubo gobiernos nacionales de distintos signos políticos. Sin embargo, en el segundo momento encontramos diferencias más notorias al interior del mismo, entre los gobiernos kirchneristas –caracterizados como postneoliberales o neo desarrollistas progresistas, que se extienden entre el 2003 hasta 2015– por un lado, y el gobierno de Mauricio Macri y la alianza Cambiemos –de claro signo neoliberal conservador, que registra cambios y continuidades respecto a las políticas públicas orientadas a actividades extractivas y a los mundos rurales– por el otro. Asimismo, el posterior retorno al poder de la coalición del Frente de Todos, conformada fundamentalmente por distintas vertientes del peronismo, significó un nuevo matiz dentro del período. En efecto, es posible identificar diferencias en torno a las políticas públicas orientadas a los pequeños productores rurales y algunas políticas focalizadas para pueblos indígenas y comunidades campesinas durante los gobiernos kirchneristas que apoyaron a estos sectores con la jerarquización del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (recategorizada como Subsecretaría en 2019 e Instituto en 2022), espacios que el gobierno macrista intentó dismantelar con relativo éxito.

Sin embargo, en la cuestión nodal del apuntalamiento del modelo extractivo a través de políticas públicas de fomento a los agronegocios, la explotación de hidrocarburos no convencionales, la megaminería a cielo abierto y la explotación del litio, todos los gobiernos fueron acrecentando la lógica extractiva hacia los bienes comunes de la naturaleza en una dinámica que puede observarse a nivel de toda la región latinoamericana. Maristella Svampa (2012) caracteriza este escenario como el “Consenso de los Commodities” mediante el cual los gobiernos latinoamericanos, independientemente de su signo político, han impulsado el modelo extractivo como forma de acumular divisas para el supuesto desarrollo de los países (sea en el formato progresista, con mayor redistribución del ingreso; sea en su faceta neoliberal, concentradora de la riqueza). Esta misma dinámica continuó acrecentándose desde 2019 hasta el gobierno de Alberto Fernández y la vuelta del peronismo al poder, el cual

tampoco modificó la hegemonía del extractivismo, tanto en los territorios como en las políticas estatales, aunque puede destacarse la incorporación de una política pública innovadora de apoyo hacia las alternativas construidas en los mundos rurales, como es la creación de la Dirección Nacional de Agroecología, que lamentablemente no obtuvo el presupuesto suficiente para poder desplegar sus proyectos a nivel nacional.

Las afirmaciones y análisis que compartimos en el presente artículo provienen de diferentes investigaciones de nuestro grupo de trabajo académico¹. Las mismas fueron llevadas a cabo utilizando diversas técnicas de recolección de datos de acuerdo con los objetivos planteados en cada una de nuestras investigaciones. A lo largo de los años hemos realizado una gran cantidad de trabajos de campo en territorios rurales, entrevistas en profundidad a diferentes sujetos que allí habitan, relatos etnográficos de las visitas de campo, observaciones participantes de acciones de protesta, encuentros y asambleas de una gran constelación de movimientos sociales rurales. Asimismo, toda esta información recogida en los trabajos de campo es complementada con datos estadísticos provenientes de distintos organismos públicos como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), principalmente a través del análisis del Censo Nacional Agropecuario y el Censo Nacional de Población en sus correspondientes ediciones.

El paradigma del extractivismo, una clave de lectura

En este apartado nos interesa introducir la noción de extractivismo como clave de análisis para caracterizar el período de 40 años de régimen democrático ininterrumpido en la Argentina, y su expresión en los mundos rurales. Inicialmente nos focalizaremos en reponer sucintamente los alcances del concepto y su capacidad para explicar los fenómenos económicos y políticos que marcaron la agenda pública de Argentina en particular y Latinoamérica en general. En este sentido, nos preguntamos también acerca del momento en que se generaron las condiciones para que se

¹ Las investigaciones contaron con fondos públicos de la Universidad de Buenos Aires y el Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, entre otras. El presente artículo fue financiado por el proyecto PICT 2020 SERIE A-I-GRF 03564 “Extractivismo y disputas territoriales: resistencia y construcción de alternativas productivas desde los movimientos sociales rurales en la Argentina, 2010-2025”, dirigido por el Dr. Juan Wahren.

desarrollara este paradigma, y si lo sucedido a partir de la década de los ochenta no podría comprenderse como preparación para lo que luego se consolidó como modelo extractivo. Finalmente deseamos incorporar los debates que agregan matices a la noción –neoextractivismo, extractivismo verde (Dietz 2023), por ejemplo– y que permiten comprender la complejidad del momento actual y las proyecciones a futuro.

Desde una perspectiva geopolítica global, en el marco de modelos que definimos como extractivistas, se evidencia una tendencia creciente a la revalorización de los recursos naturales considerados estratégicos (Acosta 2009; Alayza y Gudynas 2012; Giarracca y Teubal 2008 y 2013; Gudynas 2009; Leff 2005; Seoane et al. 2013; Svampa 2015; Teubal y Palmisano 2012; entre otros). Eduardo Gudynas fue quien introdujo el término "extractivismo" en su concepción actual, para describir las formas económicas predominantes en América Latina durante las últimas tres décadas. En su artículo titulado "Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo" (2009), emplea el término para denotar "un enfoque de desarrollo fundamentado en la apropiación de los recursos naturales, que fomenta una estructura productiva poco diversificada y altamente dependiente de la inserción global como proveedores de materias primas". Además, añade a esta definición "amplia" otra característica significativa: la participación en "actividades que involucran la extracción de grandes volúmenes de recursos naturales, que en su mayoría no sufren procesamiento (o apenas lo experimentan), y son destinados a la exportación" (Gudynas 2009: 188).

Por otro lado, Horacio Machado Aráoz (2015) señala que el término tiene dos orígenes, notablemente distintos entre sí. Por un lado, en el ámbito convencional de la ciencia económica, se usó originalmente como un adjetivo, v.g. "industrias extractivas", para hacer referencia específicamente a las actividades primarias relacionadas con la explotación de recursos no renovables, en su mayoría minerales e hidrocarburos. Por otro lado, el segundo origen del término está vinculado a las luchas llevadas a cabo por los *seringueiros* durante las décadas de los '80 y '90 para preservar sus modos de vida, frente al avance de las explotaciones agrarias de gran escala en la selva amazónica brasileña. En este contexto, el término también se utilizó en forma de adjetivo: "reservas extractivistas".

Con el tiempo, el debate fue complejizado por diversos autores y autoras, proliferando en la literatura latinoamericana nociones como extractivismo (Svampa

2012; Svampa y Viale 2014), neoextractivismo (Gudynas 2009), ofensiva extractivista (Seoane 2012; Seoane et al. 2010), régimen extractivista (Machado Aráoz 2013) y modelo extractivo-exportador (Giarracca y Teubal 2010a). Más allá de estos matices, en términos generales es analizado como un proceso multidimensional que implica: a) un uso intensivo de recursos naturales renovables y no renovables a gran escala; b) una orientación de la producción hacia la exportación donde el mercado global de *commodities* refuerza la división colonial internacional del trabajo, la naturaleza y la producción; c) una mercantilización integral de la naturaleza; d) una creciente financiarización de la actividad que se articula con diversos mecanismos de captación de renta agraria, minera o petrolera; e) un uso de capital intensivo a través de grandes empresas nacionales y/o transnacionales, que se transforman en actores totales; f) impactos socioambientales que afectan a trabajadores, poblaciones circundantes y ecosistemas; g) el desplazamiento y desposesión de las poblaciones locales a partir de diversos tipos de violencia hacia comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, entre otros actores subalternos; h) un fuerte impulso estatal a estas actividades a través de subsidios, exenciones impositivas, normativas de fomento, desregulación y/o escaso control de sus impactos sociales, sanitarios y ambientales.

En esta línea, otro aporte importante lo realizó Svampa (2012), para quién en América Latina este proceso se encuadra en un escenario político y económico caracterizado como “Consenso de los Commodities”, centrado en la exportación de bienes primarios sin mayor valor agregado como base del crecimiento económico y las políticas públicas, independientemente de las diversas orientaciones político-ideológicas que han caracterizado a los gobiernos latinoamericanos en las últimas décadas.

Algunos autores y autoras, en tanto, entienden que nos encontramos desde la década del setenta ante un nuevo ciclo de “acumulación por desposesión” (Harvey 2004; Roux 2008). Esto se expresa en una expansión sin precedentes de la violencia y el despojo capitalista, cuya especificidad está dada por un grado de extensión, densidad y dinamismo que no tiene punto de comparación en la historia, sostenida sobre la base de un salto científico-tecnológico que está ampliando a niveles inimaginables la escala de apropiación privada del trabajo colectivo y de la naturaleza (Gilly y Roux 2009). En

términos de Harvey (2004), la acumulación por desposesión² es un proceso que amplía la mercantilización y privatización de la tierra, expulsa a las comunidades campesinas e indígenas hacia zonas urbanas y transforma diversos tipos de derechos de propiedad (como los comunitarios, colectivos o estatales) en propiedad privada.

A partir de este período, se intensifica lo que O'Connor (1990) denomina "segunda contradicción del capitalismo", planteada entre el capital y la naturaleza, en la medida en que el primero tiende a autodestruir sus condiciones de producción (entre ellas el entorno natural). Dado que los ciclos de reproducción de la naturaleza no son tan rápidos como el ciclo de rotación del capital, se suscita necesariamente una contradicción entre el dominio de aquel y los ciclos biológicos del planeta. La autovalorización del capital en una escala de producción y reproducción cada vez más amplia no reconoce límites externos, de modo que "la contradicción entre una naturaleza limitada conviviendo con necesidades ilimitadas y la ilimitada acumulación de capital es intrínseca al capitalismo" (Altvater 2009: 8).

En América Latina la acumulación por desposesión se materializó mediante la implementación de políticas neoliberales, cuya primera expresión fue la oleada de privatizaciones de bienes y servicios públicos desde los años setenta. Sin embargo, años más tarde y en la medida que el modelo neoliberal se tornó hegemónico en la región, los procesos de privatización y mercantilización se extendieron más allá alcanzando un cada vez más amplio terreno societal (Svampa 2012). Así, mientras el primer momento estuvo signado por las privatizaciones y el ajuste fiscal, el segundo momento vino de la mano del aumento de la mercantilización y la explotación de los bienes comunes de la naturaleza (Seoane 2012).

Posteriormente, entrados los años 2000, se sucedieron en la región una serie de gobiernos encabezados por sectores políticos comúnmente llamados progresistas –es el caso de "Lula" da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, y los sucesivos gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, entre otros– que inauguran una etapa de crecimiento de las políticas sociales y mayor redistribución económica, aunque sin modificar la matriz extractiva de las economías nacionales. Al

² Harvey recupera las reflexiones de Rosa Luxemburgo respecto del carácter dual de la acumulación de capital basado en el despojo y la violencia extraeconómica, por un lado; y en la explotación en el marco de la legalidad burguesa, por el otro.

respecto, siguiendo a Gudynas (2009 y 2013) es posible diferenciar el extractivismo enmarcado en las políticas neoliberales de los gobiernos de centro-derecha del “neoextractivismo” propulsado por los gobiernos progresistas de la denominada “marea rosa”. La diferencia entre ambas lógicas se encuentra en los aspectos discursivos de cada gobierno y en una mayor distribución social del ingreso a través de mecanismos de captación estatal de la renta extractiva por medio de mayores regulaciones e impuestos.

Sin embargo, el momento actual presenta nuevas instancias de profundización de los procesos extractivos en el Sur Global, que implican consecuentemente abordajes y conceptualizaciones novedosas. Uno de los principales clivajes en los discursos y declaraciones de intención de los países centrales es la necesidad de transformar radicalmente la matriz energética de sus economías, a fin de dar respuesta a los requerimientos de descarbonización y neutralidad climática que en este momento histórico se consideran apremiantes para la subsistencia de las especies que habitan el planeta, incluyendo a la humana. Como señalan Bringel y Svampa (2023), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París se convirtieron en guías de las iniciativas de los países del Norte Global hacia formas alternativas de generación de energía. Como veremos, las paradojas y contradicciones que suponen estos impulsos de cambio representan un escenario aún más complejo para los países históricamente proveedores de materias primas para las economías centrales.

En efecto, la transición energética de los países centrales, que Bertinat *et al.* (2020) conceptualizan como “transición energética corporativa” –en contraposición a una de tipo popular– supone una enorme demanda de materias primas de las llamadas “críticas” y una nueva etapa de apropiación de los recursos de los países periféricos en función de las necesidades de los países centrales. Así llegamos a la noción de “extractivismo verde” (Dietz 2023) según la cual la transformación de la matriz energética propuesta por el Norte se basa en la utilización de energías renovables (eólica, solar, hidroeléctrica, geotérmica, etc.), la extracción de enormes cantidades de litio, cobre y otros metales para la transición a la electromovilidad, la generación de hidrógeno verde, etc.; todos éstos procesos radicados en los territorios de los países del Sur, los cuales se enmarcan en una nueva y más profunda etapa de colonialismo, ahora “pintado de verde”.

Esta etapa del capitalismo global puede concebirse como un nuevo momento del orden mundial, lo que Bringel y Svampa (2023) denominan “Consenso de la Descarbonización”, una etapa posterior al Consenso de Washington y al Consenso de los Commodities de las décadas de 1980-1990 y 2000 en adelante, respectivamente. Lejos de implicar cambios en la lógica de los intercambios entre las economías nacionales, dicho “acuerdo” implica el despojo y sacrificio de territorios y poblaciones antes no alcanzados por las actividades extractivas. Este nuevo equilibrio mundial atravesado por la prédica del “enverdecimiento” es lo que Isla (2022) considera una fase superior del extractivismo, un nuevo giro en el sentido de la profundización de la depredación de recursos naturales y humanos. En la misma línea, Bringel y Svampa (2023) hablan de “acumulación por desfosilización” para caracterizar esta agudización de la contradicción capital/naturaleza que, desde nuestra perspectiva, es una continuación y profundización del “Consenso de los Commodities” que amplía las fronteras territoriales y los bienes comunes de la naturaleza a ser expoliados desde un relato “sustentable”.

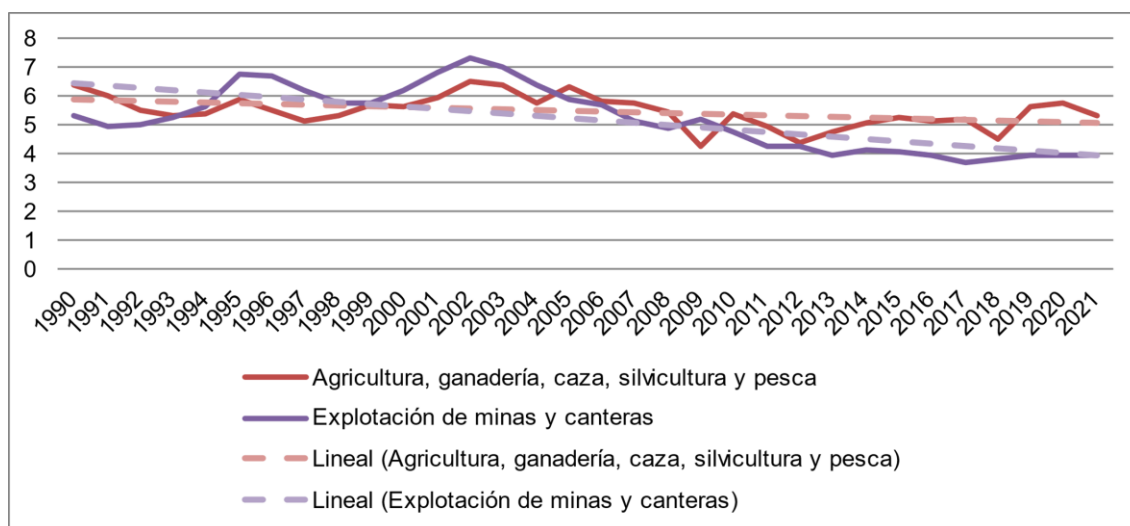
Lo cierto es que la fase actual supone la experiencia acumulada de décadas de extractivismo y neoextractivismo, las cuales han profundizado la dependencia, acrecentado las crisis económicas y sociales, y generado también la contracara de estos procesos: resistencias y construcción de alternativas en los territorios amenazados y condenados a ser sacrificados en pos del enriquecimiento de las economías del Norte Global.

Este avance y consolidación del modelo de desarrollo extractivo en la Argentina provocó un recrudecimiento de la conflictividad rural. A las disputas históricas por el acceso a la tierra por parte de los sujetos campesinos e indígenas, este modelo adicionó la conflictividad por el territorio (García Guerreiro, Hadad y Wahren 2018) dando cuenta de un “giro eco-territorial” de las luchas (Svampa 2012) en los mundos rurales de Argentina. Esto se aprecia claramente en el apartado específico donde damos cuenta de estas conflictividades en los últimos cuarenta años, donde se muestra la forma en que el extractivismo –como modelo de acumulación y despojo de los territorios rurales– aparece obturando el pacto democrático fundado hace cuatro décadas atrás.

Cambios estructurales e institucionales tras el retorno a la democracia

En Argentina, durante la hegemonía neoliberal de los noventa –y con el antecedente de la violencia represiva de la última dictadura cívico militar³– se produjeron profundos cambios en los arreglos institucionales que eliminaron instancias de regulación y debilitaron las agencias públicas orientadas al desarrollo nacional o local. Durante las décadas de 1980 y 1990, la participación del sector primario –agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, minería y extracción de hidrocarburos– en el Producto Interno Bruto (PIB) continuó reduciéndose, ahora acompañada por el sector manufacturero. Como contrapartida, el rubro vinculado con las actividades financieras, inmobiliarias y de alquiler triplicó su peso entre la década de 1970 y la de 1990 (Teubal y Palmisano 2015). Como se observa en el Gráfico 1 a lo largo de la década entre 1990 y 2001 la participación de las actividades primarias en el PIB mostró cierta estabilidad entre los 5 y 6 puntos porcentuales. Con relación al comercio exterior, los datos del Cuadro 1 muestran que entre 1993 y 2001 las exportaciones del complejo oleaginoso (40,5%) y cerealero (42,4%) crecieron por debajo de las totales (67,7%), mientras las bovinas cayeron un 17,6%.

Gráfico 1: Participación porcentual de los rubros “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” y “Explotación de minas y canteras” (incluye petróleo) en Producto interno bruto (PIB) anual (%).



Fuente: elaboración propia en base a datos de CEPAL: <https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?theme=2&lang=es> [Consulta 01 de septiembre de 2023].

³ Entre las 30.000 personas desaparecidas en el marco del terrorismo de estado entre 1976 y 1983, se cuentan cientos de activistas e integrantes de organizaciones campesinas, pueblos indígenas y habitantes de los mundos rurales que sufrieron la represión, encarcelamiento, desapariciones, exilio y asesinatos, las cuales han quedado relativamente invisibilizados respecto a lo acaecido en las grandes ciudades.

Cuadro 1: Exportaciones argentinas por complejos primarios a millones de dólares constantes (Año base 1993).

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Complejo oleaginoso	3105	3624	3873	4663	4314	4998	4287	4151	4362	4708	6317	6506	6924	7110	10191
Petróleo y gas	1193	1571	1954	2686	2749	2002	2286	3713	3504	3450	3946	4198	4743	4865	3973
Complejo cerealero	1549	1435	1937	2625	3026	2974	1935	2265	2206	1905	2041	2277	2309	2396	3710
Complejo de origen bovino	1400	1815	2344	2033	2041	1713	1633	1595	1153	1236	1329	1945	2204	2278	2290
Complejo cobre	3	12	29	27	85	408	367	287	312	371	383	522	754	977	1059
Complejo oro y plata	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	83	91	89	106	111	403	405
Total de exportaciones	13118	15515	20050	22182	24101	23782	19866	22450	21995	20925	23880	26862	30347	33875	39615

Cuadro 1 (continuación): Exportaciones argentinas por complejos primarios a millones de dólares constantes (Año base 1993).

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Complejo oleaginoso	5833	9549	12166	13881	11900	13544	13441	12193	12645	11408	9733	10804	9455	14226	13959
Petróleo y gas	1963	3588	3629	3490	3819	3188	2833	1287	1207	1419	2372	2468	1768	2321	4202
Complejo cerealero	2430	2688	3645	5998	6733	5669	3715	3434	4643	4524	4752	5770	5391	7515	8026
Complejo de origen bovino	1117	2209	2206	2573	2211	2311	2245	1706	1619	1770	2312	2766	2470	2572	2845
Complejo cobre	361	776	1019	951	975	605	583	292	388	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Complejo oro y plata	223	713	1355	1510	1440	1162	1130	1397	1246	1622	1532	1626	1337	1568	1476
Total de exportaciones	22205	38070	45876	54114	51090	47799	42337	35084	35323	31560	32794	37288	31016	42013	44110

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC: <https://www.indec.gov.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-2-39> e indexado con el *Consumer Price Index* publicado por el *Bureau of Labor Statistics* de los Estados Unidos de Norteamérica: <https://www.bls.gov/cpi/research-series/r-cpi-u-rs-allitems.xlsx> [Consulta 01 de septiembre de 2023].

En paralelo al reforzamiento del sector financiero se produjo un impulso a las actividades extractivas lideradas por empresas privadas principalmente a través de múltiples reformas de los marcos normativos y regulatorios. Por su parte, la reforma de la Constitución Nacional de 1994 incluyó algunas situaciones paradójicas. Por ejemplo, mientras, por un lado, se concretaba el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras a través de su artículo 75, inciso 17; por el otro, se fijaba el dominio originario de los recursos naturales a las provincias por medio del artículo 124. Esto producirá una creciente tensión entre las demandas indígenas por regularizar la tenencia de sus territorios y la enajenación de nuevas tierras para la actividad extractiva. Asimismo, en muchos casos esta situación permitió que algunos territorios subnacionales inicien activas campañas de captación de proyectos de gran escala con importantes impactos socioambientales (Giarracca 2006; Paterlini 2023).

Para el sector agropecuario podemos identificar dos grandes hitos: uno es el Decreto de Desregulación Económica 2284 de 1991 que eliminó gran parte de los

mecanismos regulatorios estatales del agro (Giarracca y Teubal 2008; Palmisano 2017); el otro, fue la liberación de los transgénicos que comenzó en 1996 y consolidó el paquete tecnológico del agronegocio junto a la siembra directa y los agrotóxicos de amplio espectro. La eliminación de las instancias de regulación, el fortalecimiento de los paquetes tecnológicos capital intensivos y una economía basada en la paridad cambiaria resultaron, entre otros factores, en un profundo proceso de concentración y centralización de la producción agropecuaria. Al comparar los datos de los Censos Nacionales Agropecuarios (CNA) del período se observa que la cantidad de Explotaciones Agropecuarias (EAP) a nivel nacional se redujo de 421.221 en 1988 a 333.533 en 2002 (-20,9%). Las unidades más afectadas fueron las más pequeñas (menos de 200 hectáreas) cuyo número se retrajo un 26,7%⁴. A pesar del impacto social de este modelo, entre las campañas 1984/1985 y 2001/2002 el crecimiento de la producción granaria, especialmente de la soja (cuya superficie sembrada aumentó un 252,4% y las toneladas cosechadas un 361%⁵), azuzó las posiciones celebratorias al agronegocio.

En los territorios rurales también tuvieron importantes impactos negativos las políticas neoliberales que favorecieron la llegada de proyectos de minería de gran escala y la privatización de la producción de hidrocarburos. En el caso del petróleo, la desregulación del sector fue acompañada con un largo y complejo proceso de privatización de la empresa pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) entre 1992 y 1999, que tuvo como efecto inmediato una pérdida del control estratégico sobre los hidrocarburos y la reducción de las reservas de gas y petróleo por “sobreexplotación de los yacimientos (en función de ampliar los saldos exportables) y subexploración de la superficie sedimentada, con el objetivo de maximizar las utilidades en el corto plazo” (Barrera 2012: 120). Como muestra el Cuadro 1, las exportaciones del complejo “Petróleo y Gas” pasaron de 1.193 millones de dólares en 1993 a 3.504 en 2001, un incremento del 193,7%, casi el triple de las exportaciones totales, que ascendieron de 13.118 a 21.995 (67,7%). En relación con la minería de exportación, en el mismo cuadro puede observarse cómo a partir de 1997 la participación del complejo cuprífero

⁴Elaboración propia a partir de https://sitioanterior.indec.gob.ar/cna_index.asp [Consulta 01 de septiembre de 2023] e INDEC, 1992.

⁵Elaboración propia a partir de datos de la Dirección Nacional de Agricultura: <https://datosestimaciones.magyp.gob.ar/reportes.php?reporte=Estimaciones> [Consulta 01 de septiembre de 2023].

comienza a crecer a partir de la puesta en operación del yacimiento a cielo abierto Bajo de la Alumbraera en la provincia de Catamarca.

El siguiente período estará marcado por transformaciones impulsadas tanto “desde abajo” –por la revuelta que tiene su punto cumbre el 19 y 20 de diciembre de 2001– como por los sectores dominantes que ensayan respuestas a la nueva coyuntura. El fin de la paridad cambiaria y la recuperación por parte del Estado de las herramientas de política monetaria dieron nueva visibilidad a la disputa por la renta agraria y extractiva. En un contexto de elevados precios internacionales de las materias primas, como el que tuvo lugar en buena parte del período, los derechos de exportación permitieron al Estado captar parte de esos ingresos. Si bien cuantitativamente las “retenciones” nunca fueron uno de los ingresos públicos más importantes, ya que el sistema impositivo regresivo de Argentina mantuvo la preponderancia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) como principal fuente de ingreso, simbólicamente fueron un campo de disputa. La negociación y el conflicto marcaron las relaciones entre el Estado, las entidades corporativas agrarias, los sectores agroexportadores concentrados, los nuevos sujetos agrarios emergentes del agronegocio (especialmente grandes empresas agrarias integradas y *pools* de siembra), productores capitalizados y una miríada de productores medios que se enfrentaban a la imposibilidad de sostenerse en un contexto de altos precios internacionales, pero también de aumento de la escala productiva promedio. El punto álgido de este conflicto se produjo en marzo de 2008 cuando una de las periódicas subas de las alícuotas de los derechos de exportación devino en una disputa política que logró articular “por arriba” a los actores concentrados de la actividad agropecuaria con los sectores medios rurales y urbanos, tal y como lo evidencia la activa participación de la Federación Agraria Argentina (FAA) en el agrupamiento de las entidades corporativas agrarias denominado “Mesa de Enlace” (Giarracca y Teubal 2010b; Lapegna y Palmisano 2023).

Por un lado, este segundo período registró un notable crecimiento en la producción y exportación de *commodities* agrarios. Las toneladas cosechadas de girasol, maíz, soja y trigo pasaron de 63,8 millones en la campaña 2001/2002 a 129,1 millones en 2021/22 y la superficie sembrada con cultivos de invierno (girasol, maíz y soja)

umentó un 71,6% en el mismo período, pasando de 16,7 a 28,7 millones de hectáreas⁶. En paralelo, entre 2001 y 2015 las ventas externas del complejo oleaginoso crecieron tres veces más que el total de las exportaciones (179,5% y 59,5% respectivamente). En contraste, la tasa de crecimiento de las exportaciones del complejo cerealero y bovino se mantuvieron por debajo del total, lo cual puede conectarse con una política favorable al consumo interno de dichos bienes (ver Cuadro 1).

Este aumento productivo no repercutió en el peso de la “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” en el PIB que mostró una leve disminución, representando cerca del 4,5 y 5,5% (ver línea de tendencia en el Gráfico 1). Por el otro lado, se repetía la paradoja de la etapa previa, pues la concentración y centralización de la producción agropecuaria mantuvo un ritmo similar al del período neoliberal. De las 333.533 EAP contabilizadas en el CNA 2002 quedaban 249.663 en 2018 mostrando una retracción del 25,1%. Nuevamente el estrato más afectado fue el que nuclea las EAP con menos de 200 hectáreas, cuyo número se retrajo un 27,5%⁷.

El período presenta un empuje constante a las actividades extractivas impulsadas como política de Estado, tal y como se desprende de los planes estratégicos del período. Los datos de comercio exterior (ver Cuadro 1) muestran que mientras los complejos mineros (cobre y oro) responden a una lógica fuertemente exportadora, el hidrocarburífero, tras un pico en 2006, mantiene las ventas al exterior, fluctuando en una tendencia más o menos estable. Al igual que el resto de los gobiernos de signo progresista latinoamericanos, las políticas redistributivas de las administraciones kirchneristas quedaron anudadas material y simbólicamente a las rentas de los recursos naturales, dificultando –y desacreditando– las voces críticas que desde los territorios marcaban las consecuencias socioambientales de la minería de gran escala, la extracción hidrocarburífera convencional y no convencional o las fumigaciones masivas.

Como contracara, desde 2006 algunas organizaciones campesinas e indígenas fueron ganando espacio en la interfaz entre el trabajo territorial y la política pública. Ello permitió algunos logros históricos como la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la

⁶ Elaboración propia a partir de datos de la Dirección Nacional de Agricultura: <https://datosestimaciones.magyp.gob.ar/reportes.php?reporte=Estimaciones> [Consulta 01 de septiembre de 2023].

⁷ Elaboración propia a partir de INDEC, 2021 y https://sitioanterior.indec.gob.ar/cna_index.asp [Consulta 01 de septiembre de 2023].

Agricultura Familiar y la creación de instancias específicas en la estructura del Estado como el actual Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI, ex Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, ex Programa Social Agropecuario). Si bien estas instancias no han quedado libres de tensiones, críticas y restricciones presupuestarias, encarnan, para muchas organizaciones, espacios de disputa al interior del Estado.

Por su parte, el gobierno de Cambiemos (2015-2019) potenció aún más las actividades primario exportadoras que mejoraron su rentabilidad a través de (des)regulaciones económicas e impositivas y el fomento estatal directo e indirecto. El Cuadro 1 muestra una retracción de las exportaciones del complejo oleaginoso entre 2015 y 2019 que es más que compensada por las ventas externas del complejo cerealero y bovino, tendencia que se mantiene hasta 2022 a pesar del cambio de gobierno. Además, se evidenció una transformación en la gestión de los conflictos territoriales por parte del gobierno nacional a partir de gestos favorables al accionar represivo de las fuerzas de seguridad, construcciones discursivas que insistían en la existencia de enemigos internos de la Nación o fomentando el descrédito hacia las víctimas de la violencia institucional. El fortalecimiento del sector financiero a partir del crecimiento del endeudamiento público externo en el Gobierno de Mauricio Macri (Palmisano y Teubal 2020), se convirtió en el articulador de las políticas de desarrollo de los años siguientes. Como señala Féliz (2021), este proceso redundó en mayor superexplotación de la fuerza de trabajo, precariedad en el trabajo productivo, doméstico y reproductivo llevado adelante mayormente por las mujeres y sobreexplotación de los bienes comunes.

La conflictividad y los movimientos sociales en los mundos rurales: resistencias y alternativas desde abajo

En relación con los procesos de lucha de diversos movimientos sociales rurales de la Argentina podemos marcar dos grandes períodos. El primero, que caracterizamos como de (re)emergencia organizativa e identitaria y de resistencia al neoliberalismo, comienza con la recuperación de la democracia representativa en 1983 y se extiende

hasta comienzos del nuevo siglo (2001-2002). En esta etapa (re)aparecen en la escena pública algunos viejos y nuevos movimientos sociales que marcarán la agenda de los conflictos sociales rurales por las siguientes décadas: los movimientos campesinos, los pueblos indígenas, los chacareros y las mujeres rurales.

Con dicho resurgimiento se abrió un ciclo de acción colectiva de protesta signado por la reconstrucción del entramado organizativo y comunitario, caracterizado, a su vez, por una escasa irrupción en el espacio público con el formato de protesta social tradicional, por lo menos hasta mediados de la década del noventa. En este marco se inscriben, por ejemplo, el surgimiento del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) y la Unión de Pequeños Productores del Chaco (UNPEPROCH) que dan cuenta de una recuperación de la experiencia organizativa de las Ligas Agrarias, ferozmente reprimidas durante la última dictadura militar.

Esto mismo sucede con organizaciones de pueblos indígenas que retoman trayectorias organizativas iniciadas en los setenta. Algunos de estos casos pueden vislumbrarse en la reorganización del pueblo mapuche a través de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), y en la provincia de Río Negro el Consejo Asesor Indígena (CAI) y la Coordinadora del Parlamento Mapuche; así como la rearticulación comunitaria del pueblo mapuche que recupera territorios ancestrales en la provincia de Chubut, como por ejemplo la Comunidad Pillán Mahuiza, Vuelta del Río y Santa Rosa Leleque (Hadad 2013); también en los procesos de rearticulación del pueblo en la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) en Salta y la reconstitución comunitaria en provincias como Misiones y otras del noreste argentino. Lo mismo sucede con el pueblo kolla de Jujuy y Salta que durante las décadas del ochenta y noventa (re)inician un proceso de reconstrucción identitaria y comunitaria en las zonas de yungas, quebrada y puna. También comienza un proceso de reconstrucción comunitaria de los pueblos wichí y qom en Salta, Chaco y Formosa. En el caso del pueblo diaguita, este proceso de reconstrucción identitaria y territorial comienza más fuertemente en la provincia de Tucumán y luego se extiende en Salta y Catamarca.

En una parte de estos casos se destaca la acción de un sector de la Iglesia Católica que trabajó en el apuntalamiento de estos procesos a través del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) que emergió justamente en 1980, durante los años finales

de la última dictadura cívico-militar⁸. Asimismo, pueden mencionarse procesos vinculados a organizaciones como la Federación Agraria Argentina (FAA) que lideró parte de las acciones de resistencia a la dictadura en las movilizaciones que comenzaron en el año 1980 y 1981. En el marco de la FAA, emerge ya en el año 1995 un movimiento que cobra autonomía: el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MML), cuya principal demanda sería la suspensión de los remates judiciales en las tierras chacareras hipotecadas con altas deudas, producto de la crisis agropecuaria (Giarracca y Teubal 2001). Este movimiento resaltó y amplificó el protagonismo de las mujeres rurales en las luchas por la tierra y el territorio, replicándose su ejemplo en distintas organizaciones campesinas y de chacareros/as donde las mujeres lograron desplegar su potencialidad y aumentar su participación política y de referencialidad, tanto hacia adentro de las organizaciones como también hacia el conjunto de la sociedad.

Vemos así que las organizaciones sociales rurales atravesaron una etapa de expansión organizativa en un doble movimiento: por un lado, un proceso defensivo del territorio frente al avance de la frontera agropecuaria (Giarracca y Teubal 2008); por el otro, un proceso de recuperación identitaria y de tierras ocupadas bajo lógicas propias de las organizaciones campesinas e indígenas, en contraposición con el modelo productivo del agronegocio. Además, en esta etapa se afianzó la noción de “soberanía alimentaria” como una demanda y, a la vez, un concepto clave de las luchas campesinas en Argentina y el mundo (García Guerreiro y Wahren 2016). Con el resurgimiento de los movimientos campesinos e indígenas, la clásica demanda por el acceso a la tierra se va transformando paulatinamente en una demanda más integral de (auto)gestión y/o autodeterminación del territorio.

Asimismo, podemos resaltar otra cuestión, a modo de hipótesis, con relación a las protestas sociales que se configuran desde las provincias con el retorno de la democracia, principalmente a partir de la década del noventa, y los procesos de resistencia a las reformas neoliberales del gobierno de Carlos Menem. Retomando a Norma Giarracca, afirmamos que, en efecto,

⁸ Desde finales de la década del noventa muchas de las organizaciones indígenas protagonizan un proceso de separación de la Iglesia Católica en general, y del ENDEPA en particular, ganando autonomía en sus procesos comunitarios y organizativos, aunque algunas de ellas aún mantienen vínculos con este sector de la Iglesia.

la protesta de la década tiene como característica importante el peso de los actores del interior del país, sobre todo en aquellas regiones donde “el modelo” se sintió con mayor rigurosidad. Se luchó, básicamente, por el trabajo, por la tierra y por los planes sociales que paliaban la desocupación (Giarracca 2002: 5).

Es decir, la protesta social comenzó en las provincias, sobre todo en las alejadas de la “zona núcleo”, para luego expandirse hacia el centro del país, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Podemos observar que las protestas de trabajadores estatales y docentes en contra de las reformas neoliberales comenzaron en algunas provincias como Salta, Neuquén, Río Negro y luego Santiago del Estero. Este proceso va a dar pie a la conformación de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) como una escisión de la Confederación General del Trabajo (CGT), la cual había adoptado una posición cuasi celebratoria de las reformas laborales, la privatización de empresas públicas y la desregulación de la economía, paralizando las acciones de lucha gremial en defensa de las y los trabajadores.

En ese marco, cabe mencionar que en el año 1990 la FAA protagoniza, junto a la CTA, una gran movilización a la Plaza de Mayo, conocida como “El grito del interior” donde productores chacareros de todas las provincias convergieron en reclamo de políticas públicas que favorecieran a los pequeños y medianos productores, y en contra de las medidas desregulatorias que impulsaba el entonces novel gobierno de Carlos Menem. Un formato similar se va a replicar en la Marcha Federal de 1994 impulsada por la CTA, donde además de la FAA participaron trabajadores estatales, docentes y diversas organizaciones sociales de todo el país.

En el año 1993, en la provincia de Santiago del Estero se produjo un importante estallido social –conocido como “el Santiagueñoazo”– que algunos autores identifican como el inicio del ciclo de protestas que tuvo como punto más álgido las rebeliones de diciembre de 2001 (Giarracca et. al. 2007). En este estallido convergieron trabajadores estatales, docentes, trabajadores desocupados y jóvenes de barrios populares (Farinetti 2000) y culminó con la quema de la casa de gobierno por parte de los manifestantes y con una intervención federal de la provincia, poniendo de manifiesto el hartazgo social tanto hacia los liderazgos caudillistas anquilosados desde hacía décadas, como frente a las reformas políticas y económicas neoliberales y sus efectos sociales, principalmente

en torno al aumento del desempleo y la pérdida del poder adquisitivo de vastos sectores populares.

A mediados de la década del noventa, emergió un nuevo movimiento social, producto directo de la creciente desocupación: el movimiento de trabajadores desocupados, los también denominados “piqueteros” (Svampa y Pereira 2003). En 1995 comienzan a organizarse los primeros grupos de trabajadores desocupados en la ciudad de Neuquén y en 1996 se da el primer estallido popular protagonizado por los desocupados en las ciudades de Cutral Có y Plaza Huincol, que se replicará al año siguiente aún con mayor radicalidad. Casi simultáneamente en el año 1997 se da otra rebelión social protagonizada principalmente por trabajadores desocupados en las ciudades de Gral. Mosconi y Tartagal (Salta). La conflictividad en esa región fue creciendo durante toda la década, y en los años 2000 y 2001 hubo nuevos estallidos sociales que dejaron un saldo de cinco asesinados a manos de las fuerzas represivas (policía provincial y gendarmería nacional).

La principal organización de trabajadores desocupados, la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Gral. Mosconi, se transformó rápidamente en un ejemplo paradigmático (Wahren 2012) para las nuevas organizaciones que comenzaron a emerger en distintos puntos del país, principalmente en las periferias de las grandes ciudades (Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán, Mar del Plata, La Plata, etc.). Las particularidades de la UTD se encontraban ligadas tanto a la radicalidad de sus formas de lucha –cortes de ruta prolongados, tomas de edificios públicos, cortes de acceso a empresas petroleras privadas–, como en la construcción de alternativas productivas autogestionadas en el territorio en base a los subsidios y planes sociales otorgados desde las políticas públicas paliativas, principalmente en la conformación de cooperativas de herrería, panadería, costura, carpintería, construcción, huertas comunitarias, etc. (Giarracca y Wahren 2005; Wahren 2012). Este modelo, creado en una de las zonas más periféricas del país, se expandió rápidamente, configurando algunas de las principales características del denominado movimiento piquetero, uno de los movimientos sociales más importantes de Argentina de estas últimas décadas.

El punto de inflexión que marca el cambio de etapa de la protesta social se da con las rebeliones del año 2001 (Giarracca et al. 2007), que impactaron fuertemente no sólo en las grandes ciudades sino también en los mundos rurales, modificando parte de

los clivajes político-organizativos, ampliando el repertorio de acciones y sumando nuevos sujetos con demandas ambientales en la agenda de los movimientos sociales rurales. Si indagamos acerca de lo sucedido en las provincias durante esa gran rebelión popular de 2001, encontramos otros sentidos generados en territorios diferentes a la gran metrópolis. Luego de las medidas de ajuste económico tomadas por el gobierno de De la Rúa, a mediados de diciembre del 2001, comenzaron a multiplicarse en distintas provincias del país los saqueos a pequeños comercios y grandes supermercados (en varias oportunidades se registraron enfrentamientos con la policía que reprimía e intentaba impedirlos). Asimismo, las protestas y manifestaciones con intervenciones directas se extendieron por varias ciudades: movilizaciones, cortes de calles y rutas, huelgas por tiempo indeterminado, toma de universidades y municipalidades, piquetes, entre otras. Identificamos en estas protestas una heterogeneidad de sujetos –entre trabajadores desocupados, empleados públicos, maestros, campesinos, chacareros, universitarios, vecinos, sindicatos, gremios y piqueteros– y una multiplicidad de demandas, que dan cuenta de la crisis social, política y económica que se vivía en esos días (Giarracca *et al.* 2007).

Al igual que en la década anterior, donde, como vimos, muchas provincias habían sido escenarios de importantes protestas (como las puebladas en Santiago del Estero, Cutral-Co, Mosconi y Tartagal), en diciembre del 2001 fueron las pequeñas y grandes ciudades alejadas de Buenos Aires las que comenzaron la rebelión popular que culmina, una vez más, en la Plaza de Mayo. Asimismo, no podemos olvidar que entre el 15 y el 23 de diciembre de ese año 42 personas fueron asesinadas en todo el país por las fuerzas de seguridad en el marco de la feroz represión de esos días (Giarracca *et al.*, 2007). Este proceso continuó durante varios meses de gran ebullición social hasta la fuerte represión a la protesta piquetera del 26 de junio de 2002, en el Puente Pueyrredón en la localidad bonaerense de Avellaneda, donde fueron asesinados dos manifestantes a manos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Con este hecho cierra el ciclo de protesta abierto a comienzos de los años noventa⁹.

⁹ Luego del brutal asesinato a manos de la fuerza policial de dos integrantes de los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD), Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, el entonces presidente provisional Eduardo Duhalde llamó a elecciones anticipadas para marzo de 2003.

Es en este contexto que se abre un nuevo ciclo de conflictividad en la Argentina que identificamos como el segundo período, y se extiende entre 2002 y la actualidad. Con el correr de la primera década del siglo XXI se dio una relativa reconstitución de la institucionalidad estatal, de la cual buena parte de los movimientos sociales rurales no fueron ajenos, en tanto brindaron legitimidad desde sus territorios a las políticas públicas focalizadas y, en algunos casos, participaron en la dirección de los programas y las políticas implementados. Simultáneamente a este proceso de institucionalización y de reflujos de las acciones colectivas de protesta, emergieron en distintas geografías del país una constelación de conflictos “socioambientales”, en lo que Svampa (2012) ha denominado el “giro eco-territorial” de las luchas. Una multiplicidad de actores sociales va convergiendo en estas disputas que rearticulan luchas por el territorio y permiten la vinculación entre las nacientes asambleas de comunidades con movimientos campesinos, y comunidades indígenas y organizaciones ecologistas (García Guerreiro, Hadad y Wahren 2018).

Como ejemplo paradigmático de esta convergencia y del giro eco-territorial de las luchas puede mencionarse el caso de la asamblea No a la mina de Esquel (Chubut), mediante la cual vecinas y vecinos autoconvocados de dicha ciudad se organizaron para manifestar su oposición a los emprendimientos megamineros, lo cual se plasmó ejemplarmente en la realización en 2003 de un referéndum local que expresó que más del ochenta por ciento de la población se oponía a la instalación de la megaminería en la región. Asimismo, durante la primera década del presente siglo, diferentes luchas socioambientales confluyeron bajo la identidad de Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC)¹⁰ y que, justamente por su crítica a los modelos de desarrollo dominantes, encontraron en las comunidades campesinas e indígenas una referencia para la construcción de alternativas, lo que en algunos casos permitió su articulación (García Guerreiro, Hadad y Wahren 2018). El caso de Esquel fue inspirador para las luchas anti-mineras de otras latitudes, sirviendo de guía en la organización de resistencias asamblearias en Chilecito-Famatina (La Rioja), Andalgalá y Tinogasta (Catamarca), Loncopué (Neuquén), Jáchal (San Juan), entre otras (Hadad 2020). Es por ello que planteamos que la apertura de este nuevo ciclo de disputas da cuenta de la ampliación

¹⁰ Actualmente, en el marco de una ampliación de los sujetos que se agrupan en esta red, cambiaron su nombre por el de Unión de Asambleas de Comunidades.

de los actores involucrados y la consolidación de la demanda territorial-ambiental que complementa los viejos reclamos por el acceso a la tierra y el reconocimiento político y cultural. El territorio y lo ambiental en sentido amplio aparecen como los elementos estructurantes y ordenadores de estas luchas.

En este mismo ciclo emerge una lucha territorial paradigmática como es la resistencia a la expansión de la explotación de los hidrocarburos no convencionales en la denominada formación de Vaca Muerta donde se encuentra uno de los yacimientos de gas y petróleo no convencional más grande del mundo, cuya extracción es realizada por medio de la técnica de la fractura hidráulica (*fracking*) que resulta aún más contaminante que la convencional. En este esquema se desplegaron las resistencias de comunidades indígenas mapuche de Neuquén, Río Negro y Mendoza, y las luchas de los crianceros de cabras y ovejas, que contaron con el apoyo de una constelación de organizaciones sociales (sindicatos, estudiantes, ambientalistas) y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se sumaron a la defensa de estos territorios “sacrificables” por el extractivismo hidrocarburífero (Hadad, Palmisano y Wahren 2021). Con la justificación de que estos hidrocarburos son clave para el desarrollo y el progreso del país, se transformaron radicalmente los territorios ocupados tradicionalmente por estos actores sociales, generando grandes impactos e inequidades sociales, sanitarias, económicas y ambientales en la región en una suerte de “maldesarrollo” (Svampa y Viale 2014) urbano y rural en el territorio disputado.

A este universo organizativo se sumó, en la última década, la proliferación de centenares de asambleas y espacios de vecinos y vecinas de pueblos fumigados (Gárgano 2022) en distintas provincias del país, donde la expansión del modelo de agronegocios comenzó a hacerse sentir con más fuerza. Se observan, así, los impactos directos de las fumigaciones masivas con agrotóxicos (principalmente el glifosato) sobre los ecosistemas –la contaminación de suelos y fuentes de agua, etc.– y sobre la salud humana, a través del crecimiento exponencial en zonas adyacentes a las fumigaciones de las tasas de cáncer, enfermedades respiratorias y de la piel (Verzeñassi et al. 2023). Estos espacios organizativos impulsan la prohibición de las fumigaciones, tanto aéreas como terrestres, y promueven la promulgación de leyes y ordenanzas que restrinjan estas fumigaciones estableciendo límites concretos a la pulverización de agrotóxicos en las cercanías de viviendas, escuelas, ríos, lagos, arroyos, producciones de miel y

ganadería; así como proponen la propagación de agriculturas alternativas como la agroecología, la permacultura, la biodinámica u otras formas de producción de alimentos que no utilizan agrotóxicos. La mayor parte de estas organizaciones emergieron en la denominada “zona núcleo” del agronegocio, en el sur de las provincias de Córdoba y Santa Fe y en gran parte del territorio de la provincia de Buenos Aires, conformando, a su vez, redes y encuentros de pueblos fumigados a nivel provincial y nacional.

En torno al movimiento campesino, durante los primeros años del siglo XXI, se observó una multiplicación de experiencias de organización y resistencia campesina en diferentes provincias del país, como es el caso de la Unión de Trabajadores Sin Tierra (UST) y la Organización de Trabajadores Rurales de Lavalle (OTRAL) en la provincia de Mendoza; de la Comisión Central de Tierras de Pozo Azul (CCT), la Unión de Trabajadores Rurales del Noreste Misionero (UTR), las organizaciones Productores Unidos de Santiago de Liniers (PUSALI) y Productores Independientes de Piray (PIP) en Misiones; entre otras. Asimismo, se dan una serie de articulaciones entre las que se destaca la creación en el año 2003 del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) que, como resultado de una década de articulación previa en torno a la Mesa Nacional de Productores Familiares, agrupa a organizaciones de base y de segundo grado de diferentes provincias: el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la Unión de Trabajadores Sin Tierra de Mendoza y San Juan (UST), la Red Puna y Tierra Fértil de Jujuy, Encuentro Calchaquí de Salta, la Coordinadora de Trabajadores Rurales de Misiones (COTRUM), el Movimiento Campesino de Neuquén (MCN) y el MNCI Buenos Aires (con núcleos organizativos principalmente en algunos distritos del conurbano bonaerense). Otro espacio de articulación es el que se dio en torno al Frente Nacional Campesino (FNC), en el marco del denominado conflicto entre “el campo” y el gobierno en 2008, compuesto por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero de Los Jurés, el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), el Movimiento Campesino de Jujuy (MOCAJU) y el Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR) (García Guerreiro, Hadad y Wahren 2018).

Cabe destacar también que en este período, en el marco de la lucha por el reconocimiento de sus derechos y sus territorios, diferentes pueblos indígenas lograron reconstruirse y recuperar su fuerza, así como el vínculo entre ellos. Es el caso, por

ejemplo, de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita (UPND) que se conforma en 2005, reuniendo pueblos y comunidades diaguitas de diferentes provincias (Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero) que unen sus luchas y reclamos. En el caso del pueblo mapuche se evidencia una expansión de los procesos organizativos a partir de la creación de nuevas comunidades y la emergencia de nuevos espacios políticos como el Movimiento Mapuche Autónomo del Puelmapu (MAP) y el Frente de Lucha Mapuche Campesino (FLMC), entre otros de trayectorias más radicalizadas y autonomistas, ligadas a procesos de recuperación territorial que actúan en las provincias de Chubut y Río Negro.

En paralelo, con la intensificación del modelo de desarrollo extractivista, se profundizó la violencia rural por parte del Estado, empresas y actores privados que disputan los territorios habitados por sujetos agrarios subalternos. Esto generó una serie de hechos represivos en distintas provincias con alta conflictividad territorial, algunos de los cuales provocaron la muerte de miembros de diversos movimientos indígenas o campesinos¹¹. En directa relación con estos hechos, se multiplicaron experiencias de organización, articulación y resistencia en diferentes puntos del país.

Resulta importante mencionar también las múltiples articulaciones en la lucha que se fueron gestando entre organizaciones campesinas y movimientos sociales urbanos –de desocupados, estudiantiles, empresas recuperadas y cooperativas, etc. –, que aunaron fuerzas para llevar a cabo acciones que van desde la realización de movilizaciones y protestas, hasta la construcción de propuestas concretas como redes de comercialización solidaria de productos campesinos y/o agroecológicos. Esto último se encadenó a otro proceso organizativo que comenzó en esta etapa en territorios rururbanos, donde campesinos y trabajadores rurales producen hortalizas, verduras, flores y frutas orientadas a los mercados agroalimentarios de las grandes ciudades. Las organizaciones más representativas de este proceso –Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Federación Rural por la Producción y el Arraigo y la rama Rural del Movimiento

¹¹ Entre los muertos en el marco de conflictos territoriales rurales podemos mencionar: Javier Chocobar del pueblo Diaguita en Tucumán en 2009; Roberto López de la Comunidad La Primavera del pueblo Qom en Formosa en 2010; Cristian Ferreyra y Miguel Galván del MOCASE en Santiago del Estero asesinados en conflictos territoriales en 2011 y 2012 respectivamente; Santiago Maldonado desaparecido y muerto en 2017 en la recuperación territorial de la Comunidad Cushamen en la provincia de Chubut; y Rafael Nahuel de la recuperación territorial en la comunidad Lafken Winkul Mapu de en Río Negro también en 2017.

de Trabajadores Excluidos (MTE) – visibilizaron sus demandas a través de los “verdurazos” y otros repertorios de protesta, al mismo tiempo que promovieron los debates sobre la agroecología y las cadenas alternativas de comercialización (de canales directos entre productores y consumidores) en las grandes ciudades.

Con relación al sector chacarero, observamos que durante este período una parte sustancial se articuló subordinadamente al modelo hegemónico de los agronegocios. Esto se cristalizó en la participación de la FAA en la denominada “Mesa de Enlace”, agrupamiento de las entidades patronales que protagonizó el conflicto político en torno a los derechos de exportación móviles a la soja y otros cultivos con el gobierno kirchnerista durante el año 2008, y que se transformó, como señalamos anteriormente, en un punto de inflexión de la conflictividad rural de este período (Giarracca y Teubal 2010b), amalgamando “por arriba” a los sectores concentrados de la actividad agropecuaria con los sectores medios rurales y urbanos. Otra parte, minoritaria, de los sujetos chacareros orienta su participación gremial y política hacia una articulación con actores campesinos y de pequeños productores en espacios como la Mesa Agroalimentaria Argentina donde desde la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) confluyen con la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y el Movimiento Nacional Campesino e Indígena-Somos Tierra (MNCI-ST). Al mismo tiempo, más recientemente, otros agrupamientos chacareros se suman a la Federación Rural por la Producción y el Arraigo donde conviven con organizaciones indígenas y campesinas en un mismo espacio organizativo de índole político-gremial. Desde estos espacios, tanto los chacareros como los pueblos indígenas y las organizaciones campesinas se reivindicán como expresiones del “otro campo”, para diferenciarse de la idea totalizadora de “el campo” que pretenden hegemonizar discursivamente las organizaciones patronales rurales de la denominada “Mesa de Enlace”.

Desde comienzos de la década de 2020, la resistencia territorial por parte de comunidades campesinas e indígenas frente a la avanzada extractivista se ha profundizado en varios territorios. Un ejemplo de ello es la emergencia del Tercer “Malón de la Paz”, conformado por varias comunidades que se trasladaron desde la provincia de Jujuy hasta la ciudad de Buenos Aires para hacer escuchar su reclamo¹².

¹² El Tercer Malón de la Paz es una movilización protagonizada por representantes de unos diez pueblos originarios de la provincia de Jujuy que se trasladaron desde diferentes localidades (La Quiaca,

Esta protesta pone sobre la mesa un fuerte mensaje en relación con el incumplimiento del “pacto democrático” construido en nuestro país, no sólo por el ejercicio de violencias institucionales (en este caso por parte del gobierno provincial jujeño), sino por las consecuencias que conlleva el avance de los modelos de desarrollo extractivos, basados en el sacrificio de territorios y modos de vida. Como señala Svampa (2019), estos modelos, a partir del crecimiento de la criminalización de las resistencias socioterritoriales y el incumplimiento de derechos, ponen de manifiesto que finalmente “a mayor extractivismo, menos democracia”.

Como vimos, tanto en el primer período como en el segundo, la protesta social comenzó en las zonas periféricas del país y desde allí se irradió al resto de los territorios. En particular, el ciclo de luchas “eco-territoriales” (Svampa 2012) empieza en zonas cordilleranas como oposición a la megaminería, y genera un efecto de contagio en otras luchas socio-ambientales en la que se van entretejiendo una constelación de actores sociales que hasta entonces se encontraban desarticulados: campesinos, ambientalistas, pueblos indígenas, vecinos de pueblos y ciudades intermedias, etc. Luego de desplegarse por distintas provincias, las luchas ambientales y territoriales llegan también a las grandes ciudades que comienzan a sufrir parte de los efectos adversos del crecimiento exponencial del modelo extractivo, sumado a las transformaciones climáticas producto de la crisis ecológica a escala global y aparecen diversas organizaciones ambientales urbanas que se articulan con mayor o menor fuerza a las luchas ambientales de los territorios de las provincias más alejadas del centro político del país, por ejemplo la Red Ecosocialista, la coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS), Jóvenes por el Clima, entre muchos otros colectivos.

Figura 1: Línea de tiempo que sintetiza los hitos relevantes del período.

Purmamarca, Tilcara, entre otras) para reclamar por el reconocimiento de sus derechos territoriales y para expresar su oposición a la reforma de la Constitución provincial promovida por el gobernador Gerardo Morales. En su recorrido se sumaron a la movilización referentes de otros pueblos indígenas, y desde el 1 de agosto de 2023 el Tercer Malón de la Paz realiza una vigilia en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires. Esta acción recupera la memoria del primer Malón de la Paz de 1946, que constituyó un hito histórico de la lucha indígena, donde representantes de diferentes pueblos de Salta y Jujuy llegaron caminando a Buenos Aires para visibilizar sus demandas. Al momento de escribir este artículo, el Tercer Malón de la Paz aún se encontraba acampando frente a los Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires, a la espera de ser recibidos y de obtener respuestas a su reclamo.



Fuente: elaboración propia.

Finalmente, estos procesos de resistencia social se complementan con un vasto despliegue de alternativas que construyen estos mismos movimientos sociales en los territorios en disputa. Estas experiencias alternativas pueden caracterizarse como un

enorme “laboratorio clandestino para la innovación social” (Melucci 1994) desde el cual estos actores sociales ponen en juego prácticas prefigurativas de lo político y lo social en relación a una multiplicidad de dimensiones y experiencias: formas autogestivas de producción ligadas a cooperativas, economías populares, canales de comercialización justa y solidaria, espacios de educación popular, prácticas de salud comunitaria y ancestral, formas de autogestión y autogobierno territorial, entre muchas otras prácticas de revalorización de formas comunitarias de organización social y la creación de nuevos formatos en el marco de los propios procesos de resistencia descritos anteriormente. Esta conjunción de prácticas podemos denominarlas, retomando la conceptualización de Carlos Walter Porto-Goncalves (2006), como dinámicas de “r-existencia” que se despliegan en territorios disputados, reclamados y practicados como propios por estos actores sociales subalternos que conforman un entramado territorial que definimos como “territorios insurgentes” (Wahren 2021).

En este marco, (re)emergen una constelación de demandas y de propuestas desde los movimientos sociales rurales: Soberanía Alimentaria, Agroecología, Autonomía, Comunidad, Buen Vivir/Vivir Bien, Reforma Agraria Integral (Barbetta, Domínguez y Sabatino 2012; García Guerreiro y Wahren 2016; Wahren y Schwartz 2021) que se entrelazan y conforman una agenda político social desde abajo y por abajo, muchas veces a distancia del Estado, en otras ocasiones en articulación/disputa con el entramado estatal.

Recapitulando, queremos dejar planteadas dos hipótesis acerca de las implicancias de la implantación de la lógica extractivista en los territorios y de las resistencias que se oponen a la misma, las cuales nos parecen de utilidad para pensar el escenario actual. Por un lado, consideramos que, a) la profundización del modelo de desarrollo extractivo, con la multiplicidad de impactos sociales, sanitarios y ambientales que propaga, genera una amplia vulneración de derechos de los habitantes de las zonas rurales, pero también de vastos sectores urbanos, poniendo en crisis al propio sistema democrático que no logra velar por estos derechos básicos de los pueblos y comunidades, generando una correlación que podríamos resumir en la idea de que a “mayor extractivismo, menor democracia” (Svampa 2019). Creemos que esta idea, si bien no representa un aporte original, mantiene su potencia explicativa en torno a los balances de la democracia actual y puede ser un clivaje que permita complejizar los

debates contemporáneos en torno a la coexistencia entre el modelo extractivo y los actores subalternos del campo argentino. A nuestro entender, dicha coexistencia resulta inviable pues la territorialidad que conforman los agronegocios, la megaminería y la industria hidrocarburífera es intrínsecamente excluyente, lo que provoca la imposible convivencia entre estas actividades y las territorialidades insurgentes de las comunidades campesinas, los pueblos indígenas y los pequeños y medianos productores ligados a las agriculturas alternativas.

Al mismo tiempo, creemos que, b) la generación de alternativas y procesos de re-existencia desplegados en los territorios por parte de esta constelación de movimientos sociales rurales amplía la frontera de derechos democráticos de los pueblos y comunidades, a la vez que fortalece procesos de autonomía y de autogestión de la vida cotidiana en una suerte de construcción de territorialidades alternativas y contrahegemónicas que denominamos como “territorios insurgentes” (Wahren 2021). Esta capacidad de construir “territorios de vida” por parte de los movimientos sociales rurales presenta nuevos desafíos al sistema democrático argentino que se ve en la disyuntiva de reconocer e incorporar estas demandas y derechos de los actores subalternos y cambiar la matriz de desarrollo extractiva, o de invisibilizarlos, negarlos e incluso reprimirlos para seguir apuntalando las dinámicas extractivas con las cuales confrontan estas territorialidades alternativas.

Reflexiones finales

Los 40 años desde el retorno de la democracia en Argentina han sido un período de profundos cambios, tanto para los mundos rurales como para el conjunto de la sociedad. Como vimos, en el caso de la producción agraria, la desregulación económica y la paridad cambiaria coincidieron con un proceso de incorporación tecnológica masiva que reconfiguró la forma de producir en la región pampeana y permitió la extensión del modelo del agronegocio más allá de sus territorios tradicionales. Esta extensión de la frontera agraria y la producción de *commodities* provocó el desplazamiento de otras producciones alimentarias y agroindustriales, una gran concentración de la tierra y centralización de la producción agraria. A pesar de los cambios macroeconómicos, políticos y redistributivos que acaecieron desde 2002, esta tendencia no se revirtió; más bien por el contrario: se profundizó. Los datos censales disponibles muestran la

coincidencia entre momentos de altas ganancias para los sectores más concentrados de la cadena agroindustrial y procesos de centralización que dejaron fuera a buena parte de los productores, especialmente los más pequeños, así como comunidades campesinas e indígenas que fueron despojadas de sus territorios. En síntesis, entre los treinta años que separan los Censos Agropecuarios de 1988 y 2018 quedaron fuera de la producción el 40% de las producciones agropecuarias; alrededor de poco más de 150.000 productores y productoras.

En estos contextos adversos los sectores populares rurales han desplegado procesos de resistencia y re-existencia (Porto-Gonçalves 2006). Los propios movimientos sociales y ambientales proponen alternativas al modelo extractivista que impera en nuestro país, ya sea desde los territorios hasta proyectos de ley, los cuales contribuyen a la ampliación de demandas y derechos efectivos. La apuesta por la agroecología, como alternativa al agronegocio, se suma paulatinamente a la constelación de demandas y conceptos emergentes desde los movimientos campesinos junto con la soberanía alimentaria y la reforma agraria integral y popular.

En este marco, una de las deudas más importantes de la democracia en estos 40 años ha sido perpetuar y acrecentar la desigualdad en el acceso a la tierra y el territorio de los sujetos rurales subalternos: el reparto de tierras y reconocimiento de territorios para el campesinado, los pueblos indígenas y los productores chacareros, junto con el reconocimiento efectivo de derechos contemplados en el Artículo 75 de la Constitución Nacional, siguen siendo algunas de las grandes promesas incumplidas de la democracia. Las luchas por tierra para vivir y para producir, las disputas por territorios donde desplegar la potencialidad y creación de los movimientos sociales amplifican la democracia. La reforma agraria sigue siendo una palabra maldita en la Argentina contemporánea; sin embargo, las luchas indígenas y campesinas y las propuestas alternativas que construyen en sus territorios nos acercan día a día a una democracia ampliada, más allá (o más acá) de las políticas estatales. Como plantea Svampa (2019), la profundización del extractivismo va de la mano del debilitamiento de la democracia y la inviabilidad de una convivencia de las actividades extractivas con las formas alternativas de producir y habitar en los mundos rurales. La connivencia de los diferentes gobiernos con los sectores extractivos, con notoria influencia del capital transnacional, restringe el poder de decisión de las comunidades sobre la explotación de los recursos

en sus territorios. La expansión del extractivismo avanza sobre los derechos de los pueblos, reprime y criminaliza las resistencias. A su vez, las luchas y las alternativas propuestas desde abajo por una constelación de movimientos sociales rurales, propone nuevas formas de participación política, de (auto)gestión de los territorios y de organización de la vida cotidiana que implican una profundización radical de la democracia.

El balance de esta etapa arroja incertidumbre respecto del efectivo cumplimiento de los derechos de los movimientos sociales rurales, pero también algunas certezas, como su capacidad de lucha y organización, que, en última instancia, es lo que sostiene y refuerza el horizonte emancipatorio de las (re)existencias, que proponen alternativas concretas desde los mundos rurales de Argentina hacia el conjunto de la sociedad.

Bibliografía

- Acosta, A. 2009. "La maldición de la abundancia: un riesgo para la democracia (Políticas Públicas)." *La Tendencia. Revista de Análisis Político* (9): Programa anticrisis: Legitimidad y eficacia. Quito: FES-ILDIS.
- Alayza, A. y E. Gudynas. 2012. "Sociedad civil y transiciones al postextractivismo: Ensayos, dinámicas y lecciones." En Nicoletta Velardi y Marco Zeisser (eds.), *Desarrollo territorial y extractivismo. Luchas y alternativas en la región Andina*. Cusco: Centro Bartolomé de las Casas.
- Altvater, E. 2009. "La Ecología desde una óptica marxista, en el curso Ecología política en el capitalismo contemporáneo." Buenos Aires: Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, CooperAcción y GRET.
- Barbetta, P., D. Domínguez, y P. Sabatino. 2012. "La ausencia campesina en la Argentina como producción científica y enfoque de intervención." *Mundo Agrario* 13(25).
- Barrera, M. A. 2012. "Las consecuencias de la desregulación del mercado de hidrocarburos en Argentina y la privatización de YPF." *Cuadernos del Cendes* 29(80).

- Bertinat, P., J. Chemes, y L. Forero. 2020. "Transición energética. Aportes para la reflexión colectiva." Transnational Institute, Taller Ecologista y Fundación Boell Cono Sur.
- Bringel, B. y M. Svampa. 2023. "Del 'Consenso de los Commodities' al 'Consenso de la Descarbonización'." *Nueva Sociedad* (306).
- Dietz, Kristina. 2023. "¿Transición energética en Europa, extractivismo verde en América Latina?" *Nueva Sociedad* (306).
- Farinetti, M. 2000. "Violencia y risa contra la política en el Santiagueño. Indagación sobre el significado de una rebelión popular." *Apuntes CECYP* (6).
- Félix, M. 2021. "Argentina entre la sostenibilidad de la deuda y la vida." *Revista Nuestramérica* 7(17).
- García Guerreiro, L. y J. Wahren. 2016. "Seguridad Alimentaria vs. Soberanía Alimentaria: La cuestión alimentaria y el modelo del agronegocio en la Argentina." *Trabajo y Sociedad* (26).
- García Guerreiro, L., G. Hadad, y J. Wahren. 2018. "Invisibilizaciones, (re)emergencias y resistencias territoriales: La lucha campesina e indígena en la Argentina contemporánea." En P. López y L. García Guerreiro (Coord.), *Movimientos indígenas y autonomías en América Latina: escenarios de disputa y horizontes de posibilidad*. Buenos Aires: CLACSO-Ed. El Colectivo.
- Gárgano, C. 2022. "El campo como alternativa infernal. Pasado y presente de una matriz productiva ¿sin escapatoria?" Buenos Aires: Imago Mundi.
- Giarracca, N. 2001. (Ed.). *La protesta social en la Argentina: transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*. Buenos Aires: Alianza Editorial.
- 2002. "Movimientos sociales y protestas en los mundos rurales latinoamericanos: nuevos escenarios y nuevos enfoques." *Sociologías* 4(8). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
- 2006. "Territorios en Disputa: Los bienes naturales en el centro de la escena." *Realidad Económica* (217).
- Giarracca, N. y M. Teubal. 2001. "El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha." En N. Giarracca (Ed.), *La protesta social en la Argentina: transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*. Buenos Aires: Alianza Editorial.

- 2008. "Del desarrollo agroindustrial a la expansión del 'agronegocio': el caso argentino." En B. M. Fernandes (Org.), *Campesinato e agronegócio na América Latina: a questão agraria atual*. São Paulo: Expressão Popular.
- 2010a. "Disputas por los territorios y recursos naturales: el modelo extractivo." *Revista ALASRU, Nueva Época* (5).
- 2010b. (Comp.). *Del paro agrario a las elecciones de 2009. Tramas, reflexiones y debates*. Buenos Aires: Antropofagia.
- 2013. (Coords.). *Actividades extractivas en expansión. ¿Reprimarización de la economía argentina?* Buenos Aires: Antropofagia.
- Giarracca, N., J. Wahren. 2005. "Territorios en disputa: Iniciativas productivas y acción política en Mosconi, Argentina." *Revista del OSAL* (16). Buenos Aires: CLACSO.
- Giarracca, N., D. Mariotti, R. Zibechi, M. Teubal. 2007. *Tiempos de rebelión: 'que se vayan todos': calles y plazas en la Argentina: 2001-2002*. Buenos Aires: GEMSAL/Editorial Antropofagia.
- Gilly, A. y R. Roux. 2009. "Capitales, tecnologías y mundos de la vida. El despojo de los cuatro elementos." *Revista Herramienta* (40).
- Gudynas, E. 2009. "Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual." En AA.VV., *Extractivismo, política y sociedad*. Quito: CAAP/ CLAES.
- 2013. "Extracciones, extractivismos y extrahecciones. Un marco conceptual sobre la apropiación de recursos naturales." *Observatorio del Desarrollo, CLAES* (18).
- Hadad, G. 2013. "El caso Benetton-Mapuche una década después del comienzo del conflicto. Disputas de sentidos por el derecho y la justicia." En Giarracca, N. y Teubal, M. (Coord.) *Actividades extractivas en expansión. ¿Reprimarización de la economía argentina?* Buenos Aires: Antropofagia.
- 2020. "La persistente amenaza del extractivismo minero. Actores y escenarios de resistencia en la Argentina actual." *Anuario De La Escuela de Historia* (32). <https://doi.org/10.35305/aeH.vi32.285>

- Hadad, G., T. Palmisano, y J. Wahren. 2021. "Socio-territorial Disputes and Violence on Fracking Land in Vaca Muerta, Argentina." *Latin American Perspectives* 48(1). <https://doi.org/10.1177/0094582X20975009>
- Harvey, D. 2004. "El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión." *Socialist Register*. Buenos Aires: CLACSO.
- INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). 1992. *Censo Nacional Agropecuario 1988. Resultados generales. Total país*. Buenos Aires: INDEC.
- INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). 2021. *Censo Nacional Agropecuario 2018: resultados definitivos*. Buenos Aires: INDEC.
- Isla, A. 2022. "El 'enverdecimiento', fase superior del extractivismo." *Revista de Ciencias Sociales (CR)* 1(175).
- Lapegna, P. y T. Palmisano. 2023. "Rural Mobilization and Agrarian Political Economy in Argentina, 2001-2020: Identifications, Alliances, and State Institutions." *Bulletin of Latin American Research* (42). <https://doi.org/10.1111/blar.13334>
- Leff, E. 2005. "La Geopolítica de la Biodiversidad y el Desarrollo Sustentable: economización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la naturaleza." Ponencia presentada en *Seminario Internacional REG GEN: Alternativas Globalização*, 8 al 13 de Octubre, Rio de Janeiro, Brasil UNESCO.
- Machado Aráoz, H. 2013. "Crisis ecológica, conflictos socio-ambientales y orden neocolonial: las paradojas de nuestra América en las fronteras del extractivismo." *Revista Brasileira de Estudos Latino-americanos* 3(1). Porto Alegre.
- 2015. "Ecología política de los regímenes extractivistas. De reconfiguraciones imperiales y re-existencias decoloniales en nuestra América." *Bajo el Volcán* 15(23). Puebla, México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
- Melucci, A. 1994. "¿Qué hay de nuevo en los nuevos movimientos sociales?" En J. Gusfield y E. Laraña (Coord.), *Los nuevos movimientos sociales: de la ideología a la identidad*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
- O' Connor, J. 1990. "Las dos contradicciones del capitalismo." *Revista Ecología Política* (3). Barcelona: Icaria.

- Palmisano, T. 2017. "La desregulación económica como política pública para el agro en la Argentina de comienzos de los 90's." *Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal* 17(29).
- Palmisano, T. y M. Teubal. 2020. "Aspectos generales de la política económica del gobierno de Mauricio Macri en Argentina (2015-2018)." *Revista de Ciencias Sociales. Segunda Época* (37).
- Paterlini, M. 2023. "Narrativas en conflicto sobre desarrollo y medioambiente." *Revista Sociedad* (46). Facultad de Ciencias Sociales, (UBA).
- Porto-Gonçalves, C. W. 2006. "A reinvenção dos territórios: a experiência latino-americana e caribenha." En A. E. Ceceña (Comp.), *Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado*. Buenos Aires: CLACSO.
- Roux, R. 2008. "Marx y la cuestión del despojo, claves teóricas para iluminar un cambio de época." *Revista Herramienta* (38).
- Seoane, J. 2012. "Neoliberalismo y ofensiva extractivista: actualidad de la acumulación por despojo, desafíos de NuestrAmérica." *Theomai* (26). Buenos Aires.
- Seoane, J., E. Taddei, y C. Algranati. 2010. *Recolonización, bienes comunes de la naturaleza y alternativas desde los pueblos*. Buenos Aires: GEAL.
- Seoane, J., E. Taddei, y C. Algranati. 2013. *Extractivismo, Despojo y Crisis Climática. Desafíos para los Movimientos Sociales y los Proyectos Emancipatorios de Nuestra América*. Buenos Aires: Herramienta/El Colectivo.
- Svampa, M. y S. Pereyra. 2003. *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Svampa, M. 2012. "Extractivismo neodesarrollista y movimientos sociales: ¿Un giro ecoterritorial hacia nuevas alternativas?" En AA.VV., *Más allá del desarrollo*. Ecuador: Fundación Rosa Luxemburgo.
- 2015. "¿El desarrollo en cuestión? Algunas coordenadas del debate latinoamericano." En M. Svampa (Coord.), *El desarrollo en disputa. Actores, conflictos y modelos de desarrollo en la Argentina contemporánea*. Los Polvorines: UNGS.
- 2019. *Las fronteras del neoextractivismo en América Latina: conflictos socioambientales, giro ecoterritorial en América Latina*. Guadalajara: CALAS.

Svampa, M. y E. Viale. 2014. *Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo*. Buenos Aires: Katz.

Teubal, M. y T. Palmisano. 2012. "Acumulación por desposesión: la colonialidad del poder en América Latina." En G. Massuh (ed.), *Renunciar al bien común. Extractivismo y (pos)desarrollo en América Latina*. Buenos Aires: Mardulce.

-----2015. "¿Hacia la reprimarización de la economía? En torno del modelo extractivo en la posconvertibilidad." *Realidad Económica* (296).

Verzeñassi, D., A. Vallini, F. Fernández, L. Ferrazini, M. Lasagna, A. J. Sosa, y G. E. Hough. 2023. "Cancer incidence and death rates in Argentine rural towns surrounded by pesticide-treated agricultural land." *Clinical Epidemiology and Global Health* (20).

Wahren, J. 2012. "Movimientos sociales y territorios en disputa: Experiencias de trabajo y autonomía de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, Salta." *Trabajo y Sociedad* (19). Santiago del Estero: Universidad Nacional de Santiago del Estero.

-----2021. "Territorios insurgentes. Aportes conceptuales en torno a la dimensión territorial de los movimientos sociales de América Latina." *Revista NERA* 24(61). Dossier I ELAMSS.

Wahren, J. y A. Schvartz. 2021. "Buen vivir, naturaleza en disputa y movimientos sociales rurales: una crítica al desarrollo rural." *Arandú Revista de Teoría Social, Estudios Decoloniales y Pensamiento Crítico* 3(2).

Otras fuentes

Consumer Price Index, Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos de Norteamérica

<https://www.bls.gov/cpi/research-series/r-cpi-u-rs-allitems.xlsx>

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe)

<https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?theme=2&lang=es>

Dirección Nacional de Agricultura:

<https://datosestimaciones.magyp.gob.ar/reportes.php?reporte=Estimaciones>